

## **PRIMERA PARTE**

### **La desnudez del mal**

*De modo que los peruanos de este fin de siglo enfrentaron la realidad total del Panóptico. No, no es el nombre únicamente de una cárcel peruana que se hallaba en el centro de Lima, sobre la cual se levantó lo que se llamó el Centro Cívico. Es también el nombre de un ideal siniestro, la prisión perfecta, la negra utopía en la que colabora la imaginación arquitectónica de la Europa clásica. Si visitan las enciclopedias, hallarán que se llama panóptico a una forma de prisión circular organizada en torno a un patio central con celdas equidistantes de un ángulo único de mira, de manera que puedan ser vigiladas por un solo individuo. El Panóptico es un concepto nacido en 1791, de la imaginación de Jeremias Bentham, “benefactor de la humanidad”. El diseño de las prisiones ha sido un gran tema de arquitectos y del Estado en todos los tiempos. Cómo ver sin ser visto. No fuimos los únicos en importar ese molde carcelario, hubo panópticos del tipo del limeño en diversos países. Prisión ideal, observar y castigar. El sitio donde siempre eres visto, vigilado, chantajeado, constantemente delatado. Todos miran a todos. La privacidad imposible. El recluso está aislado y, a la vez, en representación permanente. La cárcel es teatro y el teatro es infierno. Nuestro tiempo, pobre en simbología pero rico en tecnología, ha añadido el video. Y nuestra cultura política, periféricos imaginativos, los vladivideos. La posibilidad de ser filmado. Ahí en donde se supone está el orden, en realidad el epicentro del desorden social. Y la imagen como contrato y castigo. Y un país como una prisión sin muros pero con pantallas. El horror de la desnudez. La desnudez del mal.*

### **UN METEORITO SOBRE PARQUE JURÁSICO**

A mediados de setiembre del 2000, la batalla por permanecer en el poder la había ganado Fujimori. No se impone, sin embargo, a un país inerme. De febrero a julio, es decir, antes y después de los comicios de abril-mayo, se asistirá a un formidable fenómeno de protesta ciudadana, a movilizaciones que van a ser encabezadas por Alejandro Toledo, el único competidor en liza ante Fujimori, en un sistema electoral a dos vueltas. Los grandes mítines y marchas parecían cosa del pasado (mítines, no la tecnocumbia del “chinito”), pero en los agitados meses a los que hago referencia, las masas reaparecen. No son multitudes necesariamente toledistas sino antifujimoristas, pero igual sorprenden, los diez últimos años han sido de extrema pasividad. ¿Qué son? ¿De dónde surgen? Los partidos políticos desaparecieron o mermaron, incluso el siempre organizado aprismo. La calle vuelve a ser, sin embargo, la escena política,

desmintiendo a quienes creían que todo o casi todo se jugaba, en imaginario plan posmoderno, en la pequeña pantalla. Pero la calle recobra su protagonismo, y con gente muy variada, jóvenes, mujeres, frentes regionales, derechos humanos, una lucha compartida por la oposición y las oposiciones, incluida la de la prensa independiente. La vocación es democrática, la filiación partidaria imprecisa, lo que hay que destacar es la emergencia de otros actores, de una nueva gestualidad, entre irónica y colérica, como el lavado de la bandera nacional en lugares públicos, de preferencia la plaza mayor de Lima, en las narices del arrogante poder. Todo ello nos autoriza a hablar, lo que haremos más adelante, de una forma de ceremonial democrático, de dramaturgia republicana, me atrevería a decir, de una forma de desobediencia civil hasta entonces desconocida en el Perú (*infra*, IV. Caras nuevas en la vieja política).

La situación es paradójal. Nadie ha perdido. Fujimori se queda en palacio de gobierno, pese al clamor nacional contra el fraude, pese a la multitud que ocupa las calles en cuanto se conocen las primeras estimaciones el domingo 10 de abril y resulta evidente la intención de la maquinaria electoral oficial por imponer una victoria en primera vuelta. Todo estaba montado para dar como ganador absoluto al candidato-presidente, pero la calle impide que la “máquina” gane. Y que el autoritarismo se convierta en tiranía. La tiranía es usurpación, pero necesita pasar por la ley o fraguarla, como es el caso. La paradoja permanece, sin embargo, entera. La oposición se ha impuesto al retardar la victoria, pero Fujimori también sale vencedor, pese a las declaraciones de Eduardo Stein, embajador observador de la OEA, pese al centro Carter, pese a Transparencia, a la prensa internacional y a una cierta presión del gobierno de los Estados Unidos —no exageremos—, por lo menos del lado Clinton. Quizá por todo ello, y para que no queden dudas sobre su legitimidad, Fujimori se hace entronizar no una sino tres veces. La primera, el día 28 de mayo, es una declaración formal, tristemente esperada, de los resultados oficiales.

Es una desangelada victoria de candidato único. Toledo ha tenido el talento de abstenerse de participar en una segunda vuelta, a todas luces no sólo imperfecta sino amañada. La segunda ceremonia no es menos concluyente. Nadie se llama a engaño, la práctica misma del poder en Perú, y no sólo bajo Fujimori, es la de un régimen civil-militar. Nunca legalizada, siempre tácita, siempre ha sido así, con Libertadores, Caudillos o Presidentes. Los cuarteles también mandan (hasta que un día, con otra estructura de Estado, desaparezca el reflejo corporativo que guardan las fuerzas armadas para oponerse a la misma nación). Se entiende por qué es importante la extraña ceremonia del 8 de junio cuando las fuerzas armadas y policiales reconocen a Fujimori como presidente, antes de que tome el mando de su III mandato, en el Congreso, como es el uso. La ceremonia, denunciada por la oposición democrática, estuvo habitada no sólo de la solemnidad, pompa y rigor propios de esos actos castrenses, sino de una tensión especial, la difusa angustia de intuir lo que se venía, según los contados periodistas que asistieron. Unas cuantas semanas más tarde, en el festival de los videos del espanto, se sabría en qué medida la alta oficialidad de las cuatro armas estaba sometida a la “cúpula” de generales corrompidos y éstos, a su vez, al doble poder de la gemelidad autoritaria Fuji/Vladi.

Se espera, hacia julio, la legítima ceremonia republicana de toma de poder ante un Congreso igualmente surgido de los comicios presidenciales de abril-mayo y en consecuencia, en gran parte, también fraudulento. Sin embargo, como es el uso en Perú, hasta la ilegalidad guarda las formas, con más razón cuando usurpa. Pero hay un problema, que entonces puede parecer menor, y consiste en que el fujimorismo no logra contar con la mayoría necesaria de congresistas. Este hecho, la persistencia de la resistencia democrática de un lado, y del otro, la obstinación del poder en no dejar ningún resquicio ni institución representativa fuera de su control, lleva a un deslucido 28 de julio, día de la fiesta fundacional de la República peruana. No vendrán invitados extranjeros de marca, y es una toma formal de poder sobre el fondo de una capital sitiada y un país descontento hasta el fondo de las regiones y provincias más alejadas. Pesa sobre esa tercera entronización el desafío de la Marcha de los cuatro “suyus”. Toledo, que en esos meses no ha cesado de convocar mitin tras mitin en diversos puntos del país, ha organizado, en los tramos finales de esa Transición frustrada, una marcha sobre la capital, la cual llevará el nombre de los “suyus” o regiones. Si bien el término invoca la organización de la antigua sociedad inca en cuatro grandes partes, no hay que equivocarse: esta simbología tomada del pasado histórico no es indianista, ni el gesto tiene algo en común, por ejemplo, con las marchas campesinas de Ecuador o México, es más bien una manera de federar, de modo puntual, una variada, creciente y combativa, como real, oposición democrática. En suma, la Marcha no sólo es política sino cívica, o acaso una mezcla de ambas. “La manifestación política no electoral más grande de la historia del Perú”<sup>1</sup>. Una institución legal de Lima ha contado, en el proceso electoral del 2000, unos 168 fraudes y vicios. Contra la elección “frankenstein” como la llaman, el gesto de resistencia, la multitud de los “suyus”.

Pasan otras cosas, y graves, en las instituciones nacidas del sufragio, en ese mes de julio. Hay una oleada de reacomodos entre los congresistas elegidos, de pases de una bancada a otra. En efecto, varios de ellos abandonan las listas de oposición y se declaran, de la noche a la mañana, profujimoristas. La opinión pública no cree en la justificación que procuran esos representantes. Lima se llena de rumores, se les llama “tránsfugas”, hay investigación en la prensa escrita, se llega a saber cuál es el precio de cada curul, el monto del cohecho en cada caso, pero faltan pruebas concluyentes de esa forma de delito que falsifica la voluntad general que se ha expresado contra el fujimorismo, otra maña del poder que viene a sumarse a las anteriores, además del control de la judicatura y de los canales de televisión abiertos o comerciales. El actor principal en noticias políticas fue el candidato Fujimori, con un 48,9%, mientras los candidatos no oficialistas, todos, se asoman apenas en un 14,6%, según la encuesta de la asociación civil Calandria<sup>2</sup>.

La atmósfera está caldeada, aunque julio sea el mes más frío del clima limeño, cuando Fujimori presta juramento en una desamparada ceremonia oficial. Entre tanto, en las calles, columnas de manifestantes convergen hacia el centro de la ciudad, pero los servicios de seguridad del Estado han previsto una parada. El mitin es reventado desde dentro. Habrá 197 heridos, 35 personas desaparecidas, y lo más grave, mueren

seis empleados en el incendio del Banco de la Nación. Sólo unos meses después, en la exhibición de los videos que coleccionaba el asesor Montesinos y de las declaraciones de testigos cuando las lenguas se sueltan, como siempre, al final de regímenes represivos, se sabe lo que entonces se sospechaba: la violencia se debió a la acción deliberada de agentes provocadores. Pero en aquel instante, el doble poder tiene en las manos no sólo a la policía sino a los medios de comunicación. Resulta impresionante, vista con posterioridad, la campaña de prensa, radio y televisión destinada a señalar a los victimarios entre los organizadores de la misma Marcha. Participan en la operación de contrainformación no solamente los diarios lumpen o “chicha”, manejados por la “máquina” montesinista, sino parte de la prensa seria, o que se tomaba por tal, como el diario *Expreso*. La finalidad es clara: desacreditar a la oposición, culpar a Toledo y presentar a sus partidarios, a su partido mismo, “Perú Posible”, infiltrado por emerretistas. La consigna, repetida una y mil veces en los grandes titulares de la prensa, presenta a Toledo como un peligroso agitador. Pero lo cierto es que la calle le ha perdido el miedo a la policía, a la dictadura y a las bombas lacrimógenas. Una revista publica la foto de un muchacho dando un puntapié a una de esas bombas, devolviéndola.

Con todo, no hay que desestimar el efecto psicológico. Los diarios “chicha”, parte del operativo de descrédito montado por el SIN de Montesinos, se encargan de presentar a la oposición y a sus líderes como agitadores e irresponsables. Un aura de innecesaria violencia acompañará a Alejandro Toledo y gravitará, semanas y meses después, en las intenciones de voto en abril del 2001. Este tipo de poder autoritario no sólo controla sino que quiere convencer. La argumentación no es novedosa, forma parte de lo que Albert Hirschman explica en “Dos siglos de retórica reaccionaria” (*Minuit*, 1986) y que consiste en decir que las reformas, toda reforma, es fútil y perversa. Después del poder fuerte, viene el caos. La casuística del mal menor se repite. Y en muchos casos, en diversos países y circunstancias, es eficaz, cala. Tal es el caso del Perú (Cf. Epílogo. La sumisión voluntaria).

Hablamos de un triste agosto, es decir, apenas una quincena de días antes de la crisis del primer video. La oposición democrática ha realizado marchas y mítines, pero no ha desplazado a Fujimori. Los nuevos movimientos de jóvenes se preguntan qué es lo que van a hacer ahora. Nadie imagina el vuelco del cercano porvenir, y en esas circunstancias es un tiempo de sombríos presagios. Ciertamente, Fujimori ha vencido, aunque haya una mesa de diálogo con representantes de la OEA, penúltima concesión de cara a la opinión internacional, y a la que asisten los arrogantes ministros del triunfante Fujimori, miembros de la oposición democrática sin creer en ella y, una novedad, representantes de la sociedad civil. Fujimori gana tiempo, se compromete a “una recuperación democrática”, para lo cual nombra una comisión con tres de sus ministros. Una burla. Igual los empresarios se vuelven a entregar, esperando que el ministro de economía, un ultraneoliberal, Carlos Boloña, que ha vuelto, relance el proceso de venta de empresas públicas. En efecto, la privatización se ha detenido desde 1996, Fujimori sustituyó el neoliberalismo por una política clientelista destinada a ganar el afecto popular. Su propósito mayor, al que sacrificará

todo, son las elecciones del tercer mandato. Agosto es un mes de sombríos presagios, las amenazas planean sobre la activa oposición. “Se vienen leyes duras”, anuncia, espantada, la revista *Caretas*<sup>3</sup>. La congresista Carmen Lozada, en efecto, una de las “duras” del clan oficial de “las mujeres del fujimorismo”, atribuye los actos de vandalismo y asesinatos de la Marcha de los “suyus”, cínicamente, a sus organizadores democráticos, con lo cual éstos son punibles por ley de terrorismo agravado. Es sólo una iniciativa de iracunda congresista oficialista, pero revela el humor de los vencedores. Se busca el entierro en vida de los opositores bajo tribunales de justicia militar y con penas perpetuas. Faltan quince días para el video Kouri.

Es entonces que se produce un hecho insólito. Montesinos, que en diez años no se ha mostrado en público sino contadas veces —su fuerza es también su misterio—, abandona su calculado aislamiento y aparece en público. Se le verá, de un día para el otro, al lado del presidente Fujimori, ambos en conferencia de prensa, en actitud de denunciar un contrabando de armas, rodeados de un coro mudo de los más altos ministros militares (lunes 21 de agosto del 2000). A primera vista, el acto parece un alarde del doble poder, el del presidente y el de su principal asesor y jefe del servicio de inteligencia. Se especula en la redacción de los diarios y en los corrillos limeños acerca del ascenso de Montesinos a la visibilidad del poder. Hay artículos e inquietos comentarios. Lo que difícilmente podía sospecharse es que se estaba asistiendo a un canto de cisne, a un fin de reino. ¿Qué ha ocurrido?

Una denuncia venida de la revista *Cambio* de Colombia señala que los combatientes de las FARC han recibido un importante cargamento de armas, y que éstas, al provenir del lejano reino de Jordania, no han podido transitar hasta territorio colombiano sin la colaboración de jefes del ejército de un país limítrofe, es decir, el Perú. El informe de la revista es concluyente, aunque sus fuentes misteriosas. Pero lo que pone sobre el tapete es decisivo, la “máquina” montesinista trascendía las fronteras y operaba en otros países. En Perú, con prontitud notable, se encuentran nuevas pruebas del tráfico de armas. Dos congresistas de la oposición, Anel Townsend Diez-Canseco y Robinson Rivadeneyra parten a Santiago de Chile y arrancan al embajador de Jordania la confirmación de que su reino había en efecto llevado a cabo, y de manera legal, una venta de armas al Perú en 1998. Se entiende el porqué de la inesperada conferencia de prensa al unísono de Fujimori y Montesinos. Es que el negocio de compra y traslado de armas jordanas, llamado “Plan Siberia” —un gusto particular de los servicios secretos para bautizar operativos—, no podía ser otra cosa que algo organizado por oficiales de bajo rango y ex miembros de las fuerzas armadas del Perú. La idea de una purga a la peruana, con súbitos pasés al retiro estaba, pues, en marcha. El método había sido aplicado a una larga lista de militares en activo, de la noche a la mañana transformados en jubilados, sacados de mala manera por oponerse al control de sus instituciones militares por el ex capitán Montesinos, o cuando el autogolpe de abril de 1992 (hoy restituidos con honores por el gobierno de Valentín Paniagua). En la crisis de las armas jordano-peruano-FARC, Fujimori y su asesor buscan a quién cargarle el muerto, pero esta vez no tendrán

tiempo. Se han hecho de poderosos enemigos. Su desmesurado poder es nacional no internacional. Sin embargo, han metido los dedos en un engranaje exterior que los desbordará sin sombra de duda. El poder americano.

Colombia es un dolor de cabeza para Washington y por esos días arranca el plan homónimo. El propio Clinton visita ese país empantanado en una serie de guerras paralelas, de “ejército contra narco y guerrilla, paramilitares contra guerrilla y población civil, guerrillas contra población desafecta, que se resumen en una sola: la lucha por la coca”, como señala el corresponsal del diario *El País*, y añade Bastenier: “Nadie podrá nunca explicarme por qué Colombia es capaz de ser dos cosas a la vez: una gran nación y el sumidero del horror”<sup>4</sup>. Un caos, difícil de entender sin duda, dado que año tras año, el país más violento de la América Latina cierra su economía con cuentas con superávit. Un próspero desorden que se remonta a más de cuarenta años. Con todo, la hoguera colombiana puede encender la región entera. Lo que está claro es que los americanos no quieren otro Vietnam. Se comprenderá que el negociado en materia de armas internacionales emprendido por la cúpula militar-montesinista es algo que difícilmente el poder americano podía dejar pasar. Pero Montesinos es un viejo conocido de los servicios americanos. Librarse de él no es tan fácil. En los días de la administración Bush, en el tema complejo del desafío de las guerrillas senderistas y emerretistas por el control de los valles subtropicales peruanos para el cultivo de la coca, en la disputa de qué era lo que había que hacer, si combatir primero el tráfico mismo o a los guerrilleros, disputa en la que no se ponen de acuerdo la CIA y la DEA (Drug Enforcement Administration), el doctor Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia y abogado que había defendido a narcotraficantes, tuvo la fórmula de solución. Es decir, arrebatar el “impuesto coca” a los guerrilleros y entregárselo a los oficiales peruanos<sup>5</sup>. Se impone entonces una remodelación del Estado para permitir el control militar sin cortapisas de dichas zonas, en especial, del valle del Huallaga. Este tema no está ligado únicamente al autogolpe de abril de 1992, es su razón más esencial. Por cierto, esto le da a Montesinos un inmenso poder en el arranque de lo que por mi parte llamo el segundo fujimorismo (*infra*. IV, Fujimori, expediente y destino). Aquí interesa decir que en el 2000, ocho años después, decapitado el senderismo y vista la deriva mafiosa del gobierno peruano, los americanos necesitaban —o alguno de sus servicios— deshacerse de Montesinos. ¿Cómo? No se sale fácilmente, incluso para la CIA, de semejante socio. Ya no son los tiempos para un “putsch” militar sangriento como el que derrocara al presidente Allende en Chile, ni de simples motines cuarteleros como cuando Batista, Somoza, Trujillo. Los años de la “fiesta del chivo” han concluido. Además, la cúpula militar en Perú es la primera interesada en que el doctor Montesinos siga en el poder. Por lo demás, Montesinos no es ningún idiota, pudo haber tomado sus precauciones. ¿En qué caja fuerte duermen hasta hoy los documentos que comprometen a los mismos norteamericanos? Incluso en el momento en que se escribe esta crónica se ignoran muchas cosas, dónde está el asesor y si está bajo la protección de los servicios de inteligencia americanos. Y si está vivo o muerto. Pero siendo todo eso verdad, no deja de ser cierto que la intromisión en Colombia no podía haber sido montada por

oficiales subalternos. Montesinos sí podía, al tener la organización, sed de dinero y la misma omnipotencia que otorga el desproporcionado poder. En consecuencia, el Imperio contraataca. El método es simple y espectacular. El 14 de setiembre, Fernando Olivera, congresista de tenaz oposición a Fujimori, presenta públicamente un video que revela cómo el doctor Vladimiro Montesinos, asesor presidencial y jefe de inteligencia, en su despacho, personalmente, con audio y filmación completos, soborna al congresista Alberto Kouri. En ese primer video, y aunque el sonido no es muy bueno, se asiste como en el mejor de los filmes de gánsters a una escena donde el “Doc” habla suavemente a su víctima, un congresista venido de las clases populares y necesitado de dinero, y con voz de Gran Corruptor, melifluo a veces, otras mandón, recomienda que se cerciore si la cantidad que le entrega es correcta. “Bueno aquí tienes, cuenta, cuenta bien, hermanito”. La suma pactada era la muy módica de 15 mil dólares. Compungido, acosado por la prensa, días después el personaje emergente y sórdido que es Kouri (un “achorado”) dirá que esa suma fue un préstamo para comprarse un camión. En videos posteriores aparecerá otro tipo de gente, con sumas mucho mayores para otro tipo de sobornados. La máquina de corrupción toma en cuenta las diferencias de categorías sociales, es más, las establece: dos millones al director del diario *Expreso*, para que se opongá, de mala manera, al candidato Toledo. No faltaba más, todavía hay clases.

Los peruanos de esta generación de inicios del siglo veintiuno podrán difícilmente olvidar lo que fue ver y escuchar por vez primera las secretas transacciones, los infames diálogos, la entrega directa y desenfadada de dinero en maletines negros en el despacho de Vladimiro Montesinos, y todo filmado por cámaras ocultas. Lo que se pone en marcha, entonces, no es sólo el comienzo del fin de un régimen que, sin contar con muchos indicios, se sabía corrupto, sino un encadenamiento de escándalos al aparecer muchos otros videos, y denuncias, renunciadas, fugas de políticos, escape de militares, aparición de cuentas bancarias en el extranjero, lista de empresas creadas por el dinero sucio (seis meses después, cuando se redacta esta crónica, continúan las escabrosas revelaciones). El primer video, sea quien sea el conspirador que lo sacó en secreto de la protegidísima videoteca del Doctor —los marinos que hacían guardia esa noche, la CIA o el mismísimo James Bond—, desencadena, me animo a decir sin exageración alguna, el primer golpe de Estado comunicacional del siglo XXI, un retorno acelerado a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho que no costó ni una vida ni un tiro, una revolución pacífica y moral, y algo más, un vasto remezón de conciencias.

¿Cuánto tiempo agonizaron los grandes saurios del Jurásico después del misterioso meteorito? En el parque jurásico de una Lima fujimorizada, el efecto fue fulminante. El entonces embajador de los Estados Unidos, el señor Hamilton, con una copia del video-Kouri en el bolsillo, partió inmediatamente para pedir instrucciones directas a su presidente, diciendo: “demasiado es demasiado”. Una ola de estupefacción recorrió el país y luego, por los medios, el resto del mundo<sup>6</sup>. Mucho suele hablarse de la aceleración de la historia, pero pocas veces tenemos la ocasión de

asistir a un período, breve e intenso, de tal naturaleza. Atendiendo a la cronología, puede verse como los acontecimientos se precipitan.

Sólo dos días después del video Kouri, el presidente Fujimori se presenta en la televisión y anuncia nuevas elecciones, y lo que parecía imposible, el acortamiento de su mandato seguido de la promesa de no presentarse esta vez. La obstinación de sucederse a sí mismo, que no había cedido en años de protesta y presiones de todo tipo, se desvanece en cuarenta y ocho horas. Apenas diez días más tarde, Montesinos fuga a Panamá. El 23 de octubre, mes y semana después del meteorito Kouri, Montesinos, tan súbitamente como ha partido, regresa a Lima para volver a fugar la madrugada del 29 de octubre, en velero. Ah, el estilo de la mafia. En cuanto a Fujimori, va a demorarse un tanto más, acaso para buscar en los escondrijos de Montesinos —casas de playa armadas como bunkers— los posibles documentos comprometedores, pero igual, al final fuga. El 16 de setiembre, es decir, a dos meses del video-Kouri, y ante las temibles pruebas que han ido apareciendo, pretextando actividades oficiales, Fujimori parte a Brunei, y luego, en Tokio, y por fax (sí, por fax) envía su renuncia a la presidencia del Perú. En Lima, incluyendo sus colaboradores, los desconsolados ministros que lo esperaban, no encuentran adjetivos suficientes para calificar tal acto. Yo tampoco.

No es el fin del mundo, al contrario. Desde el recompuesto Congreso, donde la nueva mayoría democrática ha tenido que forcejear para sacar de la presidencia del mismo a Martha Hildebrandt, la aguerrida fujimorista de la hora veinticinco, surge un nuevo presidente legal, un presidente interino en un país en agonía, se llama Valentín Paniagua. Se había hablado de una “junta de notables”, con el antecedente de 1931. Aunque Mario Vargas Llosa recomienda esa salida, la mejor solución fue la hallada por la clase política. Para que una Transición democrática se realice es siempre necesario un máximo de legalidad. La sustitución del presidente fugado por el presidente de los congresistas está contemplada en la carta constitucional de 1993, la misma que hizo aprobar el propio Fujimori. Ante la sorpresa general, Paniagua, representante de un disminuido partido de derechas y que había obtenido su curul con poquísimos votos, se revela como un gran presidente. Modesto y a la vez audaz, llama como primer ministro a Javier Pérez de Cuéllar. El gabinete Paniagua, como lo reconoce de inmediato la opinión pública, resulta de lujo: hombres probos, competentes, mantenidos en la sombra por el peso avasallador de la “máquina”. Una buena noticia en ese mar de iniquidades que la revelación de la extensión de la corrupción va a dar a conocer. Entre las muchas cosas que emprende, la imparcialidad del Estado, el retorno a la independencia de la justicia, el dejar paso a la más intensa obra de moralización, conviene destacar un gesto, no el menor: Paniagua elimina en poco tiempo lo que queda de la mafia en el alto mando militar. En medio del asombro colectivo, destituye a los comandantes generales de las fuerzas armadas y al general Luis Cubas, jefe de la segunda región. Y en diciembre son pasados al retiro 37 generales del Ejército, veinte de la Marina y 170 oficiales de la Policía Nacional. Nadie se ha atrevido a tanto en tan poco tiempo. Han pasado tres meses del video-



Kouri. El país, que no se lo cree, empieza a respirar. Comienza entonces, y sólo entonces, la casi imposible Transición democrática (Cf. Epílogo).

bloghugoneira